

SAD-150

En Santiago de Chile el 17 de Enero de 1977, comparece ante la LICENCIADA CARMELO ARAIZA ARAYA, chilena, casada, labores de casa, domiciliada en calle Pasaje Chillán 1175, Colación William O'Neal de Maipú, madre de 6 hijos: José Orlando, Lilia Elizabeth, Priscilio Iván, Claudio Hernán, Clara Elena y Marilí del Carmen Flores Araya, de 21, 19, 17, 15, 13 y 11 años de edad respectivamente, todos estudiantes, quien, bajo la fe del juramento y ante el Notario Público que suscribe, declara:

1.- Soy madre de JOSÉ CELALDO FLORES ARAYA, chileno, actualmente de 21 años de edad, alumno de 4^o Medio en el Colegio Industrial de Maipú, al momento en que fuere arrestado.

2.- El 23 de agosto de 1974 llegaron a la citada Escuela Industrial un grupo de militares pertenecientes a la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile al mando del Teniente Haroldo Latorre, quienes procedieron a detener a mi hijo, sacándolo para ese efecto de la Sala de Clases, siendo aproximadamente las 10 horas. Mi hijo fue llevado a la oficina del Director General, don Luis Figueroa Marques, donde fue carecido con otros alumnos, entre los cuales figuraba José Luis Soto, quien actualmente y a raíz de ese incidente se encuentra fuera del país.

Desde la sala del Director mi hijo fue llevado directamente a la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile desde donde fue sacado, según se me informó en su oportunidad el cabo de Guardia, por un grupo de cuatro civiles pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional. En dicha oportunidad mi hijo fue llevado, junto al profesor de esa misma Escuela, señor José Alfaro Acuña, quien había sido arrestado en la propia Escuela Industrial, cerca de las 14 horas. Ambos llegaron a Villa Grimaldi, donde mi hijo fue introducido en una pieza donde se encontraba la joven Miriam Vega Jorquera, ex alumna de la Escuela Industrial, persona que al cabo de 13 días de incomunicación fue trasladada a Tres Alamos desde donde fue expulsada del país con destino a México. El profesor José Alfaro fue dejado en libertad al cabo de casi un año de arresto en Tres Alamos.

67.3.176.4
OTR-QM8

Hace, pues, ya DOS AÑOS Y CINCO MESES desde el arresto de mi hijo , sin que hasta la fecha haya logrado saber nada de él, ni de su paradero, ni de su estado de salud.

3.- Ante esta situación presenté un recurso de amparo el 27 de agosto de 1974, ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que fue ingresado bajo el rol N° 996-74, y después, el 21 de enero de 1975 presenté una denuncia formal al 7 Juzgado del Crimen de Mayor Cantidad de Santiago, tales peticiones se encuentran a la fecha archivadas. Debo hacer presente que en este proceso criminal declararon como testigos del arresto de mi hijo el Director de la Escuela, señor Luis Piqueros Muñoz y el profesor de ella, José Alfaro Acuña, y los militares Tenientes Haroldo Latorre y Ramón Pérez, pertenecientes ambos a la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile.

4.- El arresto de mi hijo es un hecho cabalmente cierto e irredarguable, su detención se produjo en el proprio establecimiento escolar donde estudiaba en presencia del Rector del mismo. Nadie ignora o discute ese hecho, sin embargo mi hijo no aparece. Infitiles han resultado hasta estos instantes las innumerables diligencias administrativas y judiciales que he efectuado, junto a los demás miembros de mi familia, tendientes a obtener algún dato sobre su actual paradero y destino de "salvo". No puedo caber, tampoco duda alguna en la responsabilidad jurídica del Estado de Chile en la detención de mi hijo y su posterior desaparición. Sin embargo y dado que las diligencias internas tendientes a obtener su libertad han resultado ineficaces es que me visto en la necesidad de acudir a la Comisión Interamericana y en especial a la CPI en busca de protección para la persona de mi hijo. - Es el ultimo recurso que me queda y lo ejerceré en la misma forma en que he ejercido todos mis derechos y seguiré haciéndolo hasta ver a mi hijo devuelto a su hogar.

En definitiva en el caso de mi hijo, una de diligencias administrativas y judiciales no ha sido suficiente, debemos llegar al otro extremo. - La Comisión Interamericana y la CPI tienen la obligación de velar por la integridad de los derechos humanos, y en particular de los derechos humanos fundamentales, que son precisamente los derechos humanos. - Deben ser aplicados a cada uno de los

-... personas que están en poder de la autoridad o de la fuerza armada. La